

Porque no creo en el libre comercio

El libre comercio, el libre tráfico de bienes, servicios y capitales a lo largo y ancho de este mundo, ha sido considerado, en los últimos años, la panacea económica por excelencia.

Esta opción se ha planteado como el motor del desarrollo económico, como la mejor opción, la única en boca de muchos de sus defensores, para dar impulso a los países del tercer mundo y la estabilización de las economías mundiales.

Entre los supuestos beneficios de este mercado global está, se afirma, el incentivo necesario para que la libre competencia estimule a cada economía en particular a dar su máxima capacidad.

En realidad todo esto no es más que retórica vacía de contenido. En el mejor de los casos, y suponiendo que las distintas naciones y estados tuvieran unas condiciones sociales homogéneas, lo único que haríamos sería trasladar las virtudes y defectos del sistema de economía de mercado, desde el marco estatal, a un marco internacional, global. Pero los vicios del sistema seguirían existiendo, y amplificadas por el entorno maximizado en el que se desenvolverían.

Pero este, con todos sus defectos, es un marco teórico que no se da. No hay homogeneidad ni en las condiciones sociales, ni políticas, ni económicas entre los distintos estados y naciones. De hecho si esta homogeneidad no se da ni siquiera entre los estados integrantes de la Comunidad Europea, es inimaginable que se pueda dar a nivel mundial.

Así, al lado de países que gozan, al menos teórica y nominalmente, de derechos cívicos y sociales consolidados, encontramos otros donde el concepto de ciudadano es poco más que utópico, y en los que las diferencias sociales no solo son abismales, sino que podemos hablar de condiciones de semiesclavitud, cuando no de esclavitud pura y dura.

Decir que el capital no tiene patria y que solo busca maximizar el beneficio es casi una perogrullada por lo evidente, pero no por ello deja de ser más cierto. La implantación del libre mercado mundial, esa aldea global que tan de moda se ha puesto, ha resaltado los aspectos más perversos del capitalismo. Libre de trabas legales y estatales, quienes dirigen el poder económico han puesto todo su

empeño en aprovecharse de la desregularización y de la falta de control, y así obtener el máximo beneficio posible, sin importarles los costes sociales que ello implique.

Las consecuencias no pueden ser más evidentes. Las empresas sometidas a legislaciones restrictivas, tanto en lo relativo a condiciones sociales como a controles ecológicos, no pueden competir con aquellas que pueden saltarse a la torera cualquier tipo de restricción. Nos vemos así abocados a una igualación a la baja, es decir, el supuesto objetivo de elevar las condiciones económico-sociales del tercer mundo no solo no se cumple, si no que se degradan paulatina e inexorablemente los avances sociales conseguidos en el primer mundo.

Empresarios e inversores, libres para mover sus fábricas, empresas y capitales como les viene en gana, y sin un marco legislativo común que les responsabilice de sus actos, se han convertido en vulgares delincuentes que se dedican a chantajear a gobiernos y sociedades, exigiendo cada vez más desregulación, más poder para el empresario y menos responsabilidad. Con ello, el trasvase de riqueza a quien ya disfruta de ella, y el empobrecimiento del resto de la humanidad está más que garantizado.

Y no es solo un proceso de desigualdad social creciente a lo que nos enfrentamos. Lógicamente todo ello implica una pérdida permanente de derechos. Un derecho no es real si no puede ser ejercido, y sin recursos económicos no hay derecho que pueda ser ejercido; por tanto se implanta una sociedad donde cada vez hay más ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por otra parte, el permanente chantaje a que está sometida la sociedad por parte de los poderes económicos, convierte el sistema, supuestamente democrático, en una dictadura del capital. No mandan los ciudadanos, manda quien tiene el poder económico. De hecho, puede darse el caso que las decisiones relativas a un estado en concreto sean tomadas por personas totalmente ajenas a dicha sociedad y radicadas en el otro extremo del mundo.

Pero aún hay más, en el cúmulo de decisiones de quienes detentan el poder real, únicamente pesa la obtención de beneficio, aunque ello implique actos contrarios a la lógica. Así la elaboración de ciertos productos se realiza donde, desde el punto de vista del beneficio, resulta más lucrativo, aunque ello pueda ocasionar daños ecológicos o costes añadidos de transporte, con el consiguiente gasto de recursos

energéticos, totalmente inútiles. El sistema capitalista fue diseñado cuando la naturaleza parecía poder soportar cualquier barbaridad que hiciéramos con ella, y cuando los recursos energéticos se consideraban inagotables. Aun cuando hoy sabemos que esto no es así, las prácticas capitalistas siguen anteponiendo el beneficio a cualquier otra consideración. Y el marco del libre comercio acentúa estas aberraciones.

Son sobradas las razones para rechazar el libre comercio. Una opción que solo sirve a los intereses de una minoría.